

**BOLETIN DE NOTICIAS**  
**COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID**  
 Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59  
 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección arriba señalada.

<b>BOLETÍN NÚMERO 315</b>		<b>FECHA: 15 de junio de 2021</b>
<b>SUMARIO</b>		
<b>PAÍS</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>PÁG.</b>
<b>AMÉRICA LATINA</b>	<b>AMÉRICA LATINA. DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS A LA GUERRA CONTRA LAS ARMAS</b>	<b>2</b>
	<b>REFLEXIONES SOBRE LA IZQUIERDA DESDE AMÉRICA LATINA</b>	<b>5</b>
<b>ARGENTINA</b>	<b>MUJERES INDÍGENAS RECLAMAN FIN AL TERRICIDIO EN ARGENTINA</b>	<b>8</b>
<b>COLOMBIA</b>	<b>TERRORISMO DE ESTADO</b>	<b>9</b>
	<b>COLOMBIA EN LLAMAS: EL FIN DEL NEOLIBERALISMO SERÁ VIOLENTO</b>	<b>11</b>
<b>HONDURAS</b>	<b>CARTA DE LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN APOYO A LA INCORPORACIÓN DEL SUNLA EN EL PROCESO DE INVESTIGACION Y BÚSQUEDA DE LOS GARIFUNAS DESAPARECIDOS DE TRIUNFO DE LA CRUZ</b>	<b>15</b>
<b>NICARAGUA</b>	<b>A TRES AÑOS DE LA MASACRE DE LA DICTADURA ORTEGA MURILLO</b>	<b>17</b>
<b>PERU</b>	<b>PEDRO CASTILLO, EL MAESTRO RURAL AL QUE NADIE VIO VENIR EN LAS ELECCIONES DE PERÚ.</b>	<b>19</b>
	<b>PRONUNCIAMIENTO ACERCA DEL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL PROCESO ELECTORAL</b>	<b>21</b>

## AMÉRICA LATINA

### **AMÉRICA LATINA. DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS A LA GUERRA CONTRA LAS ARMAS**

Latinoamérica es la región más violenta del mundo y estos datos muestran cuánto. El 33% de los homicidios del mundo ocurre aquí, aunque sólo somos el 8% de la población del planeta.

Los homicidios se concentran en Brasil, Colombia, México y Venezuela. En el primero, más de un millón de personas fueron asesinadas en los últimos 30 años. En su mayoría eran hombres jóvenes.

En 2017, de los 20 países con mayor tasa de homicidios per cápita, 17 eran latinoamericanos. El Salvador encabezaba la lista con una tasa promedio 60 homicidios por cada 100 000 habitantes.

Mientras que el promedio de homicidios con armas de fuego en el mundo es de 32 %, esa proporción salta al 67 % en Centroamérica; 53 % en Sudamérica, y 51 % en el Caribe. En contraste, la proporción de homicidios con armas de fuego en Asia del Este es de 3 %.

Estos datos provienen del libro *Tráfico de armas y violencia: De la red global al reto de seguridad local*, editado en 2021 por los académicos David Pérez, Carlos Pérez y Eugenio Weigened. En diez capítulos escritos por 25 expertos de 7 regiones del mundo, el libro presenta el primer estudio comparativo de los retos que tienen, en materia de armas, Estados Unidos, América Latina, Europa, África y Oceanía.

El libro aborda tres dimensiones del problema: las dinámicas del tráfico de armas; la relación entre armas y violencia, y los casos exitosos y fallidos en el intento de imponer reglas sobre la producción, almacenamiento y uso de armas ligeras en diferentes regiones del mundo.

El papel de Estados Unidos

Para los editores, no se pueden entender las dinámicas de este tráfico sin primero resaltar rol de Estados Unidos tanto en el comercio legal como ilegal de armas.

La evidencia demuestra que armas fabricadas en Estados Unidos alimentan la violencia en varias regiones. En el caso de América Latina se sabe que un número importante de armas recuperadas en escenas de crimen fueron manufacturadas en Estados Unidos, o bien importadas primero a Estados Unidos y después traficadas ilegalmente. Algunos datos elocuentes:

En Haití y las Bahamas un 98% de las armas ilegales viene de Estados Unidos.

En México esta cifra alcanzó el 70% en la última década. En los 7 países de América Central, el 50% de las armas ilegales viene de EE.UU. (respecto de América del Sur hay menos información disponible y no hay cifras al respecto).

Eugenio Weigened, uno de los autores del capítulo sobre Estados Unidos, sostiene que “un mayor número de armas no se traduce a mayor seguridad”. Los números que incluye en su capítulo alarman. En Estados Unidos una persona es asesinada con un arma cada 14 minutos; y hay un tiroteo masivo cada 25 horas (entre 2013 y 2018 se han registrado 400 tiroteos en escuelas); 76 000 personas resultan heridas con un arma cada año; y ocurre un disparo involuntario cada 18 horas.

Para Eugenio Weigened el desastre norteamericano tiene importantes lecciones para Latinoamérica. Una de ellas es que debemos poner mucha atención a quienes hacen lobby a favor de liberalizar el comercio de armas: “Hay que monitorear a los grupos de cabildeo y de interés que empujan por más armas, y su influencia en la legislación sobre políticas de armas y políticas de seguridad en general. Estados Unidos es un caso claro de que tan influyentes son. Hay intereses que protegen a la industria de las armas y no a los intereses o las demandas de la ciudadanía”.

La guerra contra las drogas

Los autores del capítulo sobre Latinoamérica resaltan que una de las principales causas del incremento de la violencia en la región es la guerra contra las drogas.

Esto ha significado el retorno de los militares en misiones de seguridad interna, lo que a su vez implica la adquisición de armas por parte de actores estatales y no estatales en toda la región. Para los editores del libro, sin embargo, el problema que enfrentamos en Latinoamérica no es la droga misma, sino el tráfico de armas. El editor Carlos Pérez resume así la idea: “Dejemos de hacerle la guerra a las drogas y hagamos la guerra a las armas”. “Si queremos reducir la violencia dejemos de hablar de drogas y pongamos a las víctimas y a las armas que las hacen víctimas al centro. Necesitamos que la academia hable más del tema. Necesitamos que ese sea el centro del debate”

La violencia ligada a la prohibición de drogas se puede medir a través del número de armas disponibles en la región. En 2017 la encuesta de Small Arms estimó que en el mundo había aproximadamente 857 millones de armas en poder de civiles. En América Latina los países que lideran la lista fueron:

Brasil con 17,5 millones,

México con 16,8 millones,

Venezuela con 5,8 millones y

Colombia con 4,9 millones.

Los autores destacan que menos del 10% de estas armas están registradas oficialmente, a pesar de la estricta legislación de estos países.

En Venezuela y Brasil, por ejemplo, hay un mínimo de edad (25 años) para obtener permiso de porte de armas. En México hay solo una tienda, propiedad del Ejército, donde se puede conseguir armas de manera legal. Además, en estos tres países el porte de armas está prohibido en territorio nacional, con excepción de oficiales de seguridad pública o privada.

El problema, sugieren los autores, radica en los miles de armas ilegales infiltradas desde Estados Unidos. Para Carlos Pérez, como es poco lo que se puede hacer para controlar el flujo que sale de Estados Unidos, una estrategia más realista se debe enfocar en las políticas locales de modo que “una vez que las armas están en el país no terminen en las manos equivocadas”. Sin embargo, de nada sirven las estrictas leyes que tienen algunos países, sin voluntad política, o capacidad institucional para hacerlas cumplir. Retos principales

El primer reto que los autores señalan en cuestión del combate al tráfico de armas es la corrupción institucional.

En Guatemala, por ejemplo, las redes de exmilitares y oficiales de inteligencia de alto rango con fuertes lazos con el sistema político han monopolizado el tráfico de armas en el país. Dinámicas similares son la norma en Latinoamérica, confirmando que el tráfico es posible gracias a la complicidad y cooperación de fuerzas de seguridad corruptas.

Uno de los muchos casos documentados de los lazos entre oficiales corruptos y el tráfico de armas es el de la venta de armas del gobierno peruano a las guerrillas colombianas en 1999. Ese año, el servicio de inteligencia de Perú (SIN), dirigido por Vladimiro Montesinos, actualmente encarcelado en Perú, compró alrededor de 10 000 armas AK-47 al gobierno de Jordania. Oficialmente el SIN sería el último destino y usuario de las armas. Sin embargo, Montesinos ya había arreglado previamente la reventa de las armas con los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Un segundo reto en la región según los autores es el contrabando de pequeñas cantidades de armas. La mayoría de las que circulan en América Latina fueron importadas así. El tráfico de armas es realizado por grupos criminales tradicionales y redes criminales transnacionales, las cuales tienen otras actividades ilegales como drogas o tráfico de personas. Es esta amplia variedad de delitos ligados al tráfico de armas lo que hace tan difícil de contrarrestarlo.

Mientras un importante porcentaje de armas es ilegalmente adquirido en Estados Unidos y después traficado a través de la frontera con México, existen otras rutas más complejas hacia el Caribe y el sur de América, las cuales reciben menos atención.

Un ejemplo son las vías marítimas. Las armas se esconden en embarcaciones, desmontadas y mezcladas con mercancía legal. Son casi imposibles de detectar debido al gran tamaño de los contenedores y la cantidad de mercancía que pasa por los puertos.

Otro gran reto es el tráfico de armas entre estados vecinos. Además de la frontera entre México y Estados Unidos, hay otras dos zonas muy complejas:

La triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Durante años, las regulaciones laxas de Paraguay hicieron de este país un paraíso para los traficantes en Brasil. Hasta hace poco, era posible comprar armas legalmente con tan solo presentar una copia de identificación a las autoridades locales. Las armas eran, en su mayoría, importadas desde Estados Unidos. A pesar de un cambio en la legislación de Paraguay, todavía existe una gran cantidad de armas estadounidenses disponibles en la frontera paraguaya.

Otro punto estratégico se encuentra en América Central, en la triple frontera entre Honduras, Guatemala y El Salvador. En esta región la cocaína y otras drogas transitan desde la zona andina hacia el norte; y las armas hacen la ruta opuesta. Con un estimado de 2,8 millones de armas no registradas en la región, es fácil encontrar donde comprar armas y municiones a lo largo de esta frontera.

Los precios incluso son los más bajo en la región, los rifles AK-47 tienen un precio entre los 200 y 400 dólares. Además de las organizaciones mexicanas y colombianas, quienes han tomado ventaja de esta situación son las pandillas locales, quienes frecuentemente son más violentas que las organizaciones transnacionales. Las consecuencias inmediatas de esto son el aumento de extorsión, secuestro, alto número de homicidios y las subsecuentes olas de migración.

Cinco recomendaciones para América Latina

Para enfrentar los principales retos identificados en la región, los académicos concluyen con cinco recomendaciones clave, basadas en la evidencia empírica que analizaron, para los diseñadores de políticas públicas en América Latina:

En países donde el excedente de armas militares es importante, gracias al declive en el tamaño de sus fuerzas armadas (Argentina, Brasil, Paraguay y Perú), la destrucción del excedente de armas es altamente recomendado.

Más que concentrar los esfuerzos en perseguir a quienes poseen armas, la recomendación es perseguir y controlar la producción, importación y comercialización ilegal y legal de armas.

En cuanto a la producción, se recomienda que los países establezcan medidas más efectivas en el registro y seguimiento de las armas producidas. Por ejemplo, asegurarse de que la marca en las armas se realice sobre una superficie visible y que sea fácilmente reconocible, legible y durable.

Una recomendación importante es la separación de las burocracias que regulan y documentan las armas y aquellas que las utilizan. Los autores recomiendan la creación de una institución mixta, bajo control civil y militar y, con un claro sistema de pesos y contrapesos.

En la mayoría de los países de América Latina, la producción, comercialización, regulación, y uso de armas de fuego está bajo control de una sola entidad, usualmente el ejército, como es el caso de Colombia, México, Chile, Paraguay y Honduras, o el Ministerio del Interior/Justicia como es el caso de Argentina, Perú, Costa Rica y Brasil. Este control institucional ha facilitado la corrupción, abuso de poder y falta de transparencia respecto a la compra, administración y distribución de armas. Para prevenir esto, la recomendación es establecer agencias de coordinación nacional para investigar y monitorear el comercio legal e ilegal de armas.

Finalmente, como los Estados Unidos son el principal proveedor de armas utilizadas en actos criminales en casi todos los países de la región, se recomienda la creación de

coaliciones diplomáticas integradas tanto por países como por ONGs con el fin de coordinar esfuerzos en favor de una regulación de armas más estricta en Estados Unidos. Una coalición así daría a los países latinoamericanos una mayor capacidad de negociación que una relación bilateral de cualquiera de los países en una relación que claramente sería asimétrica con Estados Unidos.

Cinco lecciones aprendidas

Estas cinco ideas resumen las principales enseñanzas sobre políticas que logran reducir la cantidad de armas y las que no funcionan o son muy insuficientes.

Mejorar inventarios

Para evitar fugas de municiones y armas de los almacenes nacionales, la policía y las autoridades militares deben actualizar continuamente sus inventarios, mejorar sus prácticas administrativas, y ser más transparentes. La creación de inventarios más efectivos y la implementación de mecanismos de control de adquisición de armas por civiles han dado buenos resultados en reducir el desvío de armas y municiones.

Entrega de armas

Considerar el éxito de los programas de la rendición o entrega de armas. En 2007, Argentina comenzó el programa de rendición como resultado del diálogo y la cooperación entre organizaciones civiles y el entonces gobierno del presidente Néstor Kirchner. Basada en una rendición voluntaria y anónima de armas y municiones, el plan alcanzó la destrucción de más de 175 000 armas y 1,5 millones de balas en menos de una década. A cambio, los participantes reciben un incentivo financiero. Este programa en Argentina ha sido reconocido a nivel mundial, recibiendo el prestigioso premio Future Policy Award por la mejor política pública de desarme.

Confiscar no es suficiente

Cada año se confiscan en Centroamérica alrededor de 16 000 armas. El número es tan bajo que, manteniendo ese ritmo y sin que entraran más armas al mercado, tomaría 188 años para remover todas las armas de las calles de Centroamérica». La lección en este sentido es que los esfuerzos de la policía en incautar armas son irrelevantes si los gobiernos no reducen la demanda de estos productos. Mientras la demanda persista, el impacto de las políticas de seguridad seguirá siendo limitado.

Regular la industria de armas latinoamericana

América Latina tiene una pequeña pero creciente industria regional de armas. Países como Brasil tienen una industria de defensa bien establecida que produce, ensambla, importa y exporta armas. La industria armamentista está creciendo en otros países como Chile, México y Perú. Este escenario hace que la regulación de la producción y comercialización de armas en la región sea aún más relevante.

Cooperación regional e internacional

Dicho lo anterior, hay algunas acciones que los países latinoamericanos podrían realizar para combatir el contrabando de armas. La que ha probado ser más eficaz es la cooperación entre gobiernos y organizaciones internacionales, como El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC). En colaboración con UNLIREC, muchos países han trabajado en la implementación de programas para intensificar sus capacidades de balística forense, desarrollar estrategias para investigar y sancionar el tráfico de armas y municiones. Aunque el impacto de esta y otras colaboraciones es difícil de medir, la evidencia sugiere que, hasta ahora, una de las mejores maneras de disminuir el tráfico de armas es la cooperación regional e internacional.

(Fuente: Karina G, García Reyes. The Conversation).

## **REFLEXIONES SOBRE LA IZQUIERDA DESDE AMÉRICA LATINA**

En estos últimos tiempos están apareciendo reflexiones variadas sobre categorías que antes parecían más claras. Es el caso del concepto de izquierda. Me parece saludable

intercambiar ideas que sirvan para alimentar los debates necesarios en esta época de tanta incertidumbre (y no me refiero sólo al Covid...)

Pensando este tema desde Europa la cuestión parece más sencilla, sobre todo frente al avance de nuevos partidos neofascistas por todos lados. Allí, a pesar de las ambigüedades históricas y más allá de sus diversidades y alianzas coyunturales, izquierda y derecha (con lo que eso signifique hoy) disputan el escenario político en partidos y frentes más o menos evidentes. De ahí la necesidad urgente de unir a las izquierdas en un frente común que pueda oponerse con algunas posibilidades de éxito a los crecientes expresiones de derecha.

No sé nada de cómo se dirimen estas tensiones en Africa o Asia (sólo lo que entreví en algunos Foros Sociales Mundiales). Pero de América Latina puedo comentar algunas impresiones, por experiencia acumulada, para volcar al debate abierto. Aquí las cosas son diferentes, imposibles de etiquetar en los rubros tradicionales.

Los movimientos políticos

En primer lugar, porque somos países colonizados, históricamente de España y Portugal, luego del imperialismo norteamericano y también de algunos otros que intentan sacar tajada de bienes naturales y mano de obra barata. Eso implicó, de manera estructural, que todas las luchas sociales y políticas de masas tuvieran como enemigo principal al colonialismo/ imperialismo/ neocolonialismo y sus aliados locales. Esa confrontación, con todas sus variantes coyunturales, se identificó con luchas de liberación nacionales, que no encajan exactamente en el “nacionalismo” ligado a la derecha que ven en los países centrales. A su vez, esa contradicción fue más fuerte que la oposición de clase clásica, por la composición de sus sociedades

Salvo algunas excepciones, no hubo por acá una fuerte burguesía local (sí gerentes de las burguesías centrales, y ahora del difuso capitalismo financiero y de control digital). No hubo tampoco proletariado tradicional ni enfrentamiento claro entre capital y trabajo. Argentina fue lo más cercano a eso, con su extendido y fuerte sindicalismo, junto a algunas zonas industriales de Brasil o México. La mayoría de los sectores populares latinoamericanos son trabajadores informales de la economía social, y los descendientes del campesinado de antaño se hacían hoy en las villas miseria de las grandes ciudades, con alto riesgo de cooptación por iglesias evangélicas ligadas a la derecha.

Todo ello tuvo como consecuencia que históricamente los partidos políticos representaran – por derecha, “centro” e izquierda – a sectores muy mezclados de la población, con intereses territoriales, clientelares, coyunturales, diferentes. Fueron más articulaciones políticas locales con objetivos electorales, sobre todo a partir de la segunda parte del siglo XX. Las mayores expresiones políticas y sociales transformadoras en América Latina fueron los grandes movimientos políticos, poco encuadrables en la estructura de partidos por su carácter policlasista dentro del campo “nacional y popular”, que iba desde poblaciones en la miseria, trabajadores formales e informales hasta la pequeña y mediana industria nacional, con sectores progresistas de la iglesia y en algunas ocasiones de las fuerzas armadas.

De pureza ideológica, nada. Sin embargo, históricamente fueron estos movimientos (no sólo los clásicos zapatismo, peronismo y varguismo, sino varias otras expresiones nacionales no tan visibilizadas, como hubo en Paraguay, Bolivia, Perú y Uruguay en el Cono Sur, sumadas a dispares experiencias de América Central) quienes hicieron la mayor redistribución de la riqueza en sus países cuando llegaron al Estado y en algunos casos – sin éxito – el intento de Reforma Agraria. Esos gobiernos no son socialistas sino expresión de un capitalismo keynesiano con ampliación de derechos sociales y políticos: voto femenino en 1952, extensión de la educación y la salud pública, industrialización y sindicalización, etc.

Son nuestros llamados (desde afuera) “populismos”, que son sí nacionalistas (dada la histórica confrontación con los Imperios), centralizadores del poder estatal y con algunos rasgos personalistas y autoritarios (muy semejante al socialismo “real”...), pero no fascistas ni nazis como suelen creer los europeos. Entre otras cosas porque

no son racistas, sino multiculturales y morenos, abiertos a la inmigración de todos lados, asumidos como socialmente mestizos, criollos y mezclados. En la Argentina el "ser nacional" incluye indígenas y criollos, descendientes de europeos, judíos y "turcos" (nombre dado a una amplia categoría de árabes, turcos, armenios y rusos) más algunos grupos de afrodescendientes y gitanos dispersos en las regiones.

Este rasgo multicultural fue uno de los más reprimidos por los sí fascistas gobiernos que los derrocaron (generalmente por golpes de Estado de las élites colonizadas y el Imperio), que hicieron de la relación racial-clasista su principal enemigo histórico ("los cabecitas negras" por aquí). A mí me gusta mucho el término Sudacas que nos endilgan con desprecio desde el primer mundo: me parece una categoría geopolítica a reivindicar, porque expresa esa identidad multicultural, de clases populares, situada y resistente a la dominación.

En un avance histórico de nuestros nacionalismos hacia la convergencia regional (coincidente con la distracción del Imperio hacia Medio Oriente), estos "populismos" se reciclaron a comienzos del siglo XXI en nuevos movimientos políticos (Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay) que fueron protagonistas de la mejor década de América Latina pos dictaduras y neoliberalismo: No al ALCA, UNASUR, BANCO REGIONAL DEL SUR, MERCOSUR, alineación internacional multilateralista, cancelación de deudas externas, etc. Hubo fuertes asignaturas pendientes, que continúan hoy dividiendo al progresismo, como el extractivismo, los pueblos originarios, los derechos de la naturaleza (aún en los países donde se dieron constituciones multiculturales)

Es todo eso izquierda? Técnicamente no, pero tampoco derecha. El "movimientismo", con sus pro y sus contra, ha sido la expresión política más permanente en América Latina.

Los Partidos Políticos

Esos movimientos políticos tuvieron también sus propios partidos, limitados a las estrategias electorales, la institucionalización y la burocracia estatal, con líneas internas a veces enfrentadas ideológicamente. Pero el poder popular no estaba en los partidos sino en los movimientos y sus formas organizativas; cuando se confundieron las dos cosas se debilitaron ambas y vinieron las derrotas. Con fuerte tendencia a construir Frentes políticos, estos partidos fueron muy cambiantes en alianzas y estrategias según movieran sus piezas el enemigo del Norte y sus socios locales. Sus gobiernos fueron desplazados en los últimos años – luego de los avances de la "década ganada" – bombardeados por los nuevos "golpes blandos" desde el poder económico, la Justicia y los medios de comunicación.

Con respecto a los partidos autodenominados de izquierda, salvo los potentes grupos socialistas y anarquistas que llegaron con la inmigración europea de fines del siglo XIX y comienzos del XX, la historia posterior de sus organizaciones tradicionales en estas regiones fue de histórica ceguera ante estas complejas realidades vernáculas. Ya Mariátegui había advertido el error de querer aplicar linealmente el marxismo de raíz europeo-occidental a estas tierras mestizas, cultural y socialmente diversas. Con la única excepción de Cuba (que mantuvo su alineamiento ideológico internacional pero supo articular políticas estratégicas con las experiencias más progresistas de la región) y de Chile (un frente de izquierda de masas en los '70), la mayoría de ellos continuaron iguales a través del tiempo, con ínfimos resultados electorales, aliándose coyunturalmente con la derecha frente a su enemigo principal: el "populismo" y el "progresismo". Hoy algunos de ellos representan un problema adicional porque se alían a ciertos grupos sectoriales con visibilidad en los países centrales y aquí apoyan golpes (Bolivia) o partidos de derecha (Ecuador).

Los movimientos sociales y frentes políticos de masas, así como los grandes sindicatos y las redes globales hace mucho que están ausentes de los partidos políticos "de izquierda". También juegan por afuera de ellos las nuevas irrupciones de jóvenes en la región (Chile, Perú, Colombia), con una fuerza arrolladora, escasa organicidad y preocupación por cuestiones de época bastante ajenas a nuestras

viejas categorías. Para las grandes transformaciones que necesitamos con urgencia, son bienvenidos todos los que quieran otro mundo posible, anticolonial/racista, anticapitalista y antipatriarcal, se llamen como sea. No pongamos demasiado énfasis en las denominaciones.

El desafío actual

A estas confusiones políticas regionales se suman ahora algunos grupos sectoriales que las agudizan, particularmente ciertos referentes ecologistas, feministas e indígenas ligados a ONG del Norte, que se unen a los pequeños partidos de izquierda equivalentes. No es casual que hayan aparecido juntos frente a procesos como los del golpe en Bolivia o las elecciones en Ecuador (con la CONAIE dividida), en actitudes funcionales a la derecha. Parece un nuevo Caballo de Troya desembarcado en estas tierras. Impone una contradicción muy difícil de resolver tanto para los movimientos sociales que siguen resistiendo en los territorios como para los intelectuales comprometidos con esos procesos, porque apelan a algunas de nuestras banderas: feminismo, ecologismo, pueblos indígenas.

Pero al interior de sus discursos crece una dirección muy diferente a la de las luchas históricas de estos sectores, que termina confluyendo con posturas y demandas de la derecha, tanto del Norte como local. La excusa es, nuevamente, el “progresismo” como enemigo principal: enfatizan algunos de sus errores y defecciones, sacándolos del contexto de gobiernos muy condicionados por los poderes externos, que avanzan con dificultad hacia frágiles democracias populares. Como si los gobiernos de derecha a los que se acercan (o respecto a los cuales se mantienen “neutrales”) pudieran ser menos extractivistas, patriarcales y racistas...

Estos grupos han introducido un escenario donde ya no hay clara división entre derecha e izquierda, ni entre colonialismo y periferia, ni entre progresismo y organismos transnacionales. Todo se ha mezclado allí y surgen combinaciones incomprensibles para nuestras viejas percepciones del mundo, pero que sobre todo dividen y enfrentan al campo popular. Esto, que se vio nítidamente en Bolivia y Ecuador, puede extenderse en la región como mancha de aceite a los otros procesos políticos en danza, con elecciones y constituyentes. Me pregunto a quiénes benefician estas extrañas confrontaciones contemporáneas en América Latina. No es muy difícil la respuesta. Si no logramos clarificar un poco esta confusión ideológica vamos a terminar peleando entre nosotros en uno de los momentos globales con mayor necesidad de unión estratégica del campo popular.

(Fuente: Norma Fernández. Especial para OtherNews)

## **ARGENTINA**

### **MUJERES INDÍGENAS RECLAMAN FIN AL TERRICIDIO EN ARGENTINA**

El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir realizó una caminata de 2.000 kilómetros, que comenzó el 14 de marzo.

Las activistas exigen que el terricidio sea considerado un crimen de lesa naturaleza y lesa humanidad.

Alrededor de 100 mujeres indígenas, representantes de los 36 pueblos originarios que habitan en territorio argentino, llegaron el sábado a la sede del Congreso nacional, en Buenos Aires, para exigir el fin del “terricidio”, concepto que engloba la explotación de los recursos naturales, femicidios, racismo y colonialismo.

Las integrantes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir culminaron de esta manera una caminata de 2.000 kilómetros, que comenzó el 14 de marzo pasado desde distintos puntos del país suramericano.

Bajo la campaña Basta de Terricidio, las activistas demandan se declare esa práctica como un crimen de lesa humanidad y piden se protejan los ecosistemas y las condiciones de vida de sus comunidades.

“En un día histórico, luego de dos meses de un caminar ineludible llegamos a Buenos Aires para plantarnos frente al Congreso de la Nación Argentina, la misma que comete Terricidio de manera impune y cotidiana, vinimos a decirles: Basta!”, externó la organización en un tuit.

Explicó que este sábado se instaló como el Día Global de Lucha: “Basta de terricidio y el año que viene volveremos con más fuerza”.

“Seremos miles entrando al Congreso para exigir que el Terricidio sea considerado un Crimen de Lesa Naturaleza y Lesa Humanidad, y que los terricidas paguen condenas altas por todo lo que han hecho”, subrayó.

Afirmó: “Comenzó un nuevo tiempo. El de la plurinacionalidad de los territorios. La caminata comenzada el 14 de marzo desde diversos territorios plurinacionales ha llegado a su fin, pero la revolución recién comienza.

(Fuente: Telesur)

## COLOMBIA

### **TERRORISMO DE ESTADO**

La desaparición forzada es una práctica del Terrorismo de Estado: más de 600 personas han sido desaparecidas por la policía colombiana en tres semanas.

Varios cuerpos de manifestantes que han sido detenidos-desaparecidos por la policía colombiana, han empezado a aparecer flotando en los ríos de Colombia y en fosas clandestinas.

Colombia padece una brutal represión estatal. La policía está perpetrando miles de capturas para intentar sofocar la protesta social. Las fuerzas represivas capturan a los manifestantes e incluso van a las casas a secuestrar a los jóvenes: o para judicializarlos bajo los reiterados montajes judiciales que emplea el Estado colombiano para reprimir la protesta, o para desaparecerlos.

Los organismos defensores de derechos humanos expresan que es muy importante que las personas detenidas intenten gritar sus nombres y apellidos y que la vecindad procure filmar el hecho, para intentar evitar que los secuestrados por la policía sean víctimas del crimen de Estado de la desaparición forzada. Las personas desaparecidas por la policía en tres semanas de Paro Productivo Nacional se reportan por centenares (Defensoría reportaba 548 personas desaparecidas a nivel nacional a 7 de mayo, La Unidad de Búsqueda reportaba 379 personas desaparecidas para el período comprendido entre el 28 de abril y el 7 de mayo. Tan solo en Cali organismos defensores de derechos humanos reportan 206 personas desaparecidas entre el 28 de abril y el 20 de mayo). De algunas de esas personas secuestradas y desaparecidas por la policía, han aparecido los cuerpos sin vida. Los cuerpos de dos jóvenes secuestrados por la policía el 28 de abril aparecieron a inicios de mayo flotando en el río Cauca, en mayo también apareció el cuerpo sin vida de un líder campesino y el cuerpo con signos de tortura de la maestra y sindicalista Beatriz Moreno Mosquera. También han aparecido otros cuerpos de manifestantes torturados, flotando en los ríos, algunos en fosas y otros desmembrados en bolsas, como se puede apreciar en los vídeos y fotografías que, horrorizada, graba la población.

La desaparición forzada es una práctica del Terrorismo de Estado que las fuerzas represivas del Estado colombiano han empleado intensivamente contra la población desde hace décadas, y que están empleando con particular saña durante este Paro productivo: esta práctica inyecta terror y devasta a familias y comunidades.

El pueblo colombiano exige que el Estado colombiano devuelva a los centenares de desaparecidos: a los que todavía tenga vivos en comisarías, batallones militares, almacenes o casas clandestinas de la policía, que los devuelva, y que cese la barbarie policial de la desaparición forzada. Las personas que la policía haya enterrado en fosas comunes y lanzado a ríos, seguirán siendo buscadas y reclamadas incansablemente por sus familias, sus comunidades, y por todo un país que no va a permitir "la desaparición de los desaparecidos". Nos los arrancaron por ser personas dignas que lucharon por todas y todos, no permitiremos que sus nombres se olviden, ni mucho menos que su lucha se apague. El Terrorismo de Estado no logrará callar la lucha social de un pueblo harto de explotación, de precariedad y saqueo capitalista. Colombia llora, Colombia sufre, pero no se rinde.

Las fuerzas represivas del Estado colombiano, desatadas para sofocar la protesta social a sangre y exterminio, van sin placas, disparándole a los barrios con 9 milímetros y fusiles de guerra, disparando lacrimógenas caducadas (lo que las convierte en un veneno letal) incluso directamente contra las casitas de los barrios obreros, hiriendo y asesinando. La policía sigue cada día y cada noche llevándose muchachos para desaparecerlos. Ha llegado al extremo de convertir un centro comercial, en Calipso, en un centro policial de torturas (el almacén Éxito, propiedad del grupo capitalista francés Casino y de la burguesía colombiana). El Terrorismo de Estado en Colombia está asesinando a la población por protestar contra la violencia estructural que cercena millones de vidas, arrojándolas al empobrecimiento más cruel, para que un puñado de multinacionales y explotadores locales incrementen sus fortunas. El oro que se come la burguesía transnacional y colombiana en sus platos "exquisitos", lleva incrustado el dolor y la sangre de todo un pueblo.

Pese a la brutal represión desatada por el Estado colombiano a través de sus herramientas policiales, militares, parapoliciales y paramilitares, el 23 de mayo, a día de 26 de Paro Productivo a nivel nacional en Colombia, siguen masivas las movilizaciones. La clase trabajadora, harta de explotación, rechaza el paquete privatizador del gobierno de Duque y exige condiciones de vida dignas.

El régimen colombiano quiere callar al pueblo asesinándolo y desapareciéndolo, calumniándolo y disparando mentiras en ráfaga a través de los grandes medios de desinformación masiva; cuenta con el silencio cómplice y el trabajo manipulador de los medios propiedad de la burguesía local y transnacional. Hasta las redes dificultan la publicación y censuran los vídeos que más evidencian la represión genocida y las razones profundas del Paro, y además el Estado colombiano tumba la señal de internet reiteradamente.

El gigantesco doble rasero de los organismos internacionales solamente se ha pronunciado de boca pequeña con relación a la represión homicida del Estado colombiano: porque es un Estado amigo del imperialismo estadounidense y europeo y viabiliza el mayor saqueo de los recursos de Colombia, precisamente mediante el Exterminio. Pretenden sofocar el clamor de un pueblo. Pero no lo logran: el régimen genocida, funcional al mayor saqueo capitalista de Colombia, no puede con el pueblo unido. No logra sofocar el Paro ni con Terrorismo de Estado ni con el martilleo de mentiras.

El pueblo colombiano está a punto de cumplir un mes de Paro Productivo Nacional, con mucha solidaridad entre la clase trabajadora, con mucha organización y valentía. Con bloqueos de carreteras como la Panamericana, bloqueos de grandes puertos como el puerto de Buenaventura, bloqueos de vías extractivas por las cuales las multinacionales encaminan las inmensas riquezas de Colombia hacia sus buques de saqueo (como en la mayor mina de carbón a cielo abierto del mundo, El Cerrejón), paro de camioneros, manifestaciones multitudinarias, creaciones y talleres artísticos, talleres productivos populares, mercados campesinos solidarios, encuentros, asambleas, Minga indígena, afro y campesina, Ollas comunitarias, Mamás Capucha, lucha callejera para defender el derecho a manifestarse de las arremetidas de la

policía, brigadas médicas, brigadas pedagógicas, primera, segunda y tercera línea, etc. El Paro sigue porque la clase trabajadora exige condiciones de vida dignas.

Cifras que arroja la brutal represión desatada por el Estado colombiano contra el pueblo en Paro Productivo, contra la protesta social del pueblo que se manifiesta cansado de explotación, precarización y saqueo capitalista.

- Más de 60 personas asesinadas por la policía, ESMAD, militares y paramilitarismo en coordinación con la policía. 52 personas asesinadas por el accionar de la policía entre el 28 de abril y el 20 de mayo, según la organización Defender la Libertad. Y varias personas asesinadas por el accionar encubierto parapolicial de policías operando sin uniforme, o de policías uniformados operando en conjunto con paramilitarismo.

- Centenares de personas víctimas de desaparición forzada, un crimen de Estado de Lesa Humanidad. Las personas desaparecidas por la policía en tres semanas de Paro Productivo Nacional se reportan por centenares. Defensoría reportaba 548 personas desaparecidas a nivel nacional a 7 de mayo. La Unidad de Búsqueda, tras atender las denuncias y recopilaciones 26 organizaciones sociales, entregó sus estadísticas para el período comprendido entre el 28 de abril y el 7 de mayo: 379 serían los manifestantes desaparecidos hasta esa fecha. Tan solo en Cali, organismos defensores de derechos humanos como Buscarles Hasta Encontrarles, reportan 206 personas desaparecidas entre el 28 de abril y el 20 de mayo.

- Miles de personas heridas por el accionar de la policía y demás fuerzas represivas. Decenas de personas mutiladas de sus ojos por la policía. Decenas de defensores de DDHH agredidos.

- Al menos dos decenas de mujeres víctimas de violencia sexual a manos de la policía (las que han podido denunciarlo).

- Miles de personas detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y tratos crueles e inhumanos.

(Fuente: Cecilia Zamudio. Pensamiento crítico)

## **COLOMBIA EN LLAMAS: EL FIN DEL NEOLIBERALISMO SERÁ VIOLENTO**

Colombia está en llamas. Actualmente es uno de los países con más muertos por covid-19, ocupando el cuarto lugar en la región después de Estados Unidos, Brasil y México, teniendo hasta la fecha tan solo el 3,5% de la población totalmente vacunada y siendo parte de los países que se niegan a apoyar la solicitud de liberación de las patentes de las vacunas. Es también el país que en 2020 tenía el 42,5% de su población en condición de pobreza monetaria y el 15,1% de la misma en condición de pobreza monetaria extrema. A estos datos mínimos pero significativos le podemos sumar que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, se han asesinado entre 700 y 1.100 personas defensores y defensoras de derechos humanos (las cifras varían entre las ONG y las instituciones gubernamentales).

Las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARC-EP hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico, minería ilegal) sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando gravemente el tejido social y dando como resultado que esto es sólo la punta del iceberg del nuevo panorama que atraviesa el país.

Es en este contexto, y tras casi tres años bajo el gobierno de una derecha opositora al acuerdo de paz en medio de una pandemia que ha matado a miles de personas, en el que pueblo trabajador ha salido a las calles a levantar su voz en contra de una anunciada reforma tributaria que buscó, bajo la lógica del Gobierno, recaudar 23 billones de pesos (algo cercano a 6.300 millones de dólares) para mejorar las finanzas públicas y financiar los programas de asistencia social. Si bien es cierto que el país

necesita mejorar su sistema tributario, esta reforma planteaba aumentar el número de personas que declaran y pagan impuestos sobre la renta con el aval, la visión y el marco conceptual del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Plantear la idea de que más personas sean las encargadas de tributar y financiar los gastos del Estado, en teoría, no suena descabellado, es más, llevaría a pensar que serían las personas de altos ingresos quienes más pagarían impuestos teniendo en cuenta los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en la Constitución Política de Colombia. Pero, según los datos del Banco Mundial, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina (el índice GINI es de 51,3), reflejando una política fiscal inadecuada y regresiva que posibilita una alta concentración del ingreso y la riqueza, y ocasiona por ello un menor desarrollo, dado que los ingresos y la riqueza se quedan en manos de un porcentaje muy pequeño de la población. La reforma planteada, se uniría al largo y complejo sistema tributario del país que no refleja una verdadera política progresiva y que está lleno de beneficios tributarios dirigidos a las personas con mayores ingresos.

Podríamos afirmar que a partir de 2016 el pueblo trabajador ha inundado las calles y plazas de Colombia exigiendo la defensa de la paz y el cumplimiento de los acuerdos, la protección de los líderes sociales y la solidaridad con quienes han sido asesinados, así como el rechazo a propuestas de modificación de los regímenes pensionales, laborales y tributarios. Así, en los últimos cinco años Colombia ha visto sus calles recorridas por jóvenes, mujeres, indígenas, afros, docentes, pensionados y estudiantes que han generado hechos insólitos como una de las mayores manifestaciones en el país desde la década de 1970, como lo fue la llevada a cabo el 21 de noviembre de 2019 (21N).

Gracias a este empoderamiento popular, y a pesar de la pandemia de la covid-19, Colombia volvió a marchar del 9 al 21 de septiembre de 2020 para protestar en contra del abuso policial, del mal manejo del Gobierno ante la crisis económica y social provocada por la pandemia y para sentar una voz que dijera basta ya a las masacres en el país, las cuales no tuvieron tregua a pesar de las medidas de confinamiento. En especial hay que subrayar la Minga (movilización indígena) del suroccidente colombiano, ocurrida en octubre de 2020 liderada por las organizaciones indígenas, que emocionó por sus consignas y valentía y que logró movilizar a una gran parte de la sociedad en torno a sus exigencias tras su recorrido por el país, logrando la opinión favorable de millones de personas que los recibieron calurosamente en cada ciudad durante su viaje hasta la capital.

Bajo este panorama el pueblo decidió a partir del 28 de abril (28A) de 2021 marchar en contra de la reforma tributaria y del gobierno indolente. La represión de las fuerzas policiales es brutal. El malestar ciudadano ha sido objeto de estigmatización y represión por parte de la fuerza pública, lo que ha llevado a que distintas organizaciones de derechos humanos registren entre el 28 de abril y el 5 de mayo un total de 1.708 casos de violencia policial, 381 víctimas de violencia física por parte de la Policía, 31 muertes (en proceso de verificación), 1.180 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 31 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la Policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de fuerza pública. De igual manera, la Defensoría del Pueblo (la figura del ombudsman en Colombia) señaló que se registraron 87 quejas por presuntas desapariciones durante las protestas del Paro Nacional del 28A.

Lo que empezó como una fuerte oposición a una reforma impopular y a un ministro de Hacienda que desconocía el valor de una docena de huevos (y en general de toda la cesta de la compra familiar), ha escalado al punto de no solo lograr que se retire dicha reforma en el Congreso y que dicho ministro renuncie, sino que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ha propuesto un espacio de diálogo con distintos sectores de la sociedad civil, diálogo que hasta el momento parece ser solo entre las élites del país, desde arriba, y nunca desde abajo. Las organizaciones sociales saben

por experiencia que de este Gobierno nada bueno hay que esperar, pero como siempre lo han hecho no se rehúsan al diálogo. La primera victoria del movimiento ciudadano en las calles sobre la retirada de la reforma no llegó pacífica o gratuitamente. Además de las cifras antes mencionadas y recolectadas por las ONG del país, el presidente Duque anunció la militarización de Colombia antes de ceder al clamor social. A partir del 1 de mayo, las redes sociales y las calles colombianas han visto el horror de un despliegue militar típico de un estado de excepción dictatorial, con la Policía disparando en contra de manifestantes pacíficos y desarmados. Esta ha sido quizás la respuesta más violentamente represiva en tiempos de pandemia a nivel mundial.

Particularmente en Cali las protestas tuvieron una intensidad muy especial debido a la movilización de las organizaciones indígenas después del cruel asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena de apenas 35 años que proponía la recuperación de los conocimientos tradicionales y rechazaba la presencia de todos los actores armados en su territorio. Esta ciudad es el segundo centro urbano más negro de América del Sur, llena de contradicciones y luchas, y que ha visto cómo reprimen a su pueblo de la forma más aberrante posible. La situación es tal que, en medio de una reunión pacífica y retransmitida en directo por las redes sociales, se puede observar al escuadrón antidisturbios haciendo presencia para dispersar la manifestación, causando la muerte de un joven frente a más de 1.000 espectadores que observaban a través de internet. Desde Siloé, una comuna (favela) de Cali, se denunció también que durante la noche del 4 de mayo no se pudo acceder al servicio de internet en la zona.

La débil respuesta a la violencia policial por parte de las instituciones colombianas (tanto administrativas como judiciales) ha dado lugar a que civiles armados amenacen (y en ocasiones disparen) a los manifestantes bajo la idea de que son “vándalos” y “terroristas”. En Cali, los estudiantes hicieron circular el siguiente “diálogo”: “Tenemos 25.000 armas”, gritaba un hombre vestido de blanco desde su costosa camioneta aparcada frente a la Universidad del Valle (Univalle). “Nosotros tenemos una de las mejores bibliotecas del país”, le contestó un estudiante. En Pereira, el alcalde promovía un “frente común” que incluyera a miembros de la seguridad privada, al Ejército y a la Policía para “recuperar el orden y la seguridad ciudadana”, dando lugar a que un joven resultara herido con ocho balas y esté agonizando en un hospital de dicha ciudad.

¿Para dónde va Colombia?

Esta pregunta es importante para Colombia, pero más allá de Colombia me parece ver en los recientes acontecimientos el embrión de mucho de lo que pasará en el continente y en el mundo en las próximas décadas. Claro que cada país tiene una especificidad propia, pero lo que pasa en Colombia parece anunciar el peor de los escenarios que identifiqué en mi reciente libro sobre el periodo postpandemia (El futuro comienza ahora: de la pandemia a la utopía. Madrid: Akal. 2021). Este escenario consiste en la negación de la gravedad de la pandemia, la política de sobreponer la economía a la protección de la vida, y la obsesión ideológico-política de volver a la normalidad aun cuando la normalidad es el infierno para la gran mayoría de la población.

Las consecuencias de la pandemia no pueden ser mágicamente frenadas por la ideología de los gobiernos conservadores; la crisis social y económica pospandémica será gravísima, sobre todo porque se acumula con las crisis que preexistían a la pandemia. Será por eso mucho más grave. Las políticas de ayuda de emergencia, por deficientes que sean, combinadas con el ablandamiento económico causado por la pandemia, van a causar un enorme endeudamiento del Estado, y el agravamiento de la deuda será una causa adicional para más y más austeridad. Los gobiernos conservadores no conocen otro medio de lidiar con las protestas pacíficas del pueblo trabajador en contra de la injusticia social que no sea la violencia represiva. Así van a responder y el mensaje va a incluir la militarización creciente de la vida cotidiana. Lo

que implica el uso de fuerza letal que fue diseñada para enemigos externos. La degradación de la democracia, ya bastante evidente, se profundizará todavía más. ¿Hasta qué punto el mínimo democrático que todavía existe colapsará dando lugar a nuevos regímenes dictatoriales?

Este escenario no es especulación irrealista. Un reciente informe del FMI hace la misma previsión. Dicen los autores Philip Barrett y Sophia Chen\* que las pandemias pueden tener dos tipos de efectos sobre la agitación social: un efecto atenuante, suprimiendo la posibilidad de causar disturbios al interferir en las actividades sociales, así como un efecto contrario que aumente la probabilidad de malestar social y por consiguiente se generen disturbios o protestas en la medida en que la pandemia se desvanezca. Lo que no dicen es que las protestas serán motivadas por las mismas políticas que el FMI y las agencias financieras promueven en todo el mundo. Es tanta la hipocresía del mundo en el que vivimos, que el FMI ignora u oculta las consecuencias de sus lineamientos. El pueblo colombiano merece y necesita de toda la solidaridad internacional. No estoy seguro de si la tendrán abiertamente de las agencias internacionales que dicen promover los derechos humanos, a pesar de que estos estén siendo violados tan gravemente en Colombia. Imaginemos por un momento que lo que está pasando en Colombia estuviese ocurriendo en Caracas, Rusia o cualquier otra parte del mundo declarado como no amigo de los Estados Unidos. Seguramente la Organización de Estados Americanos (OEA), el alto comisariado de la ONU y el Gobierno estadounidense ya estarían denunciando los abusos y proponiendo sanciones a los gobiernos infractores. ¿Por qué la suavidad en los comunicados emitidos hasta la fecha?

No se le puede escapar a nadie que Colombia es el mejor aliado de los Estados Unidos en América Latina, siendo el país que se ofreció para instalar siete bases militares estadounidenses en su territorio (situación que afortunadamente no ocurrió por intervención de la Corte Constitucional). Las relaciones internacionales en el presente viven el momento más escandaloso de hipocresía y parcialidad: solamente los enemigos de los intereses norteamericanos cometen violaciones de los derechos humanos. No es nuevo, pero ahora es más chocante. Las agencias multilaterales se rinden a esta hipocresía y parcialidad sin ningún tipo de vergüenza. Los colombianos, eso sí, pueden esperar la solidaridad de todos los demócratas del mundo. En su valentía y en nuestra solidaridad reside la esperanza. El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los demócratas del mundo.

Por el momento, las manifestaciones en Colombia no se ven próximas a finalizar y pese a que solo ha pasado una semana desde el inicio de las mismas, debemos insistir en superar el miedo que ronda las calles del país y en la esperanza de un futuro prometedor, más justo y en paz, para un país que ha querido terminar un conflicto de más de cincuenta años a través de un Acuerdo que agoniza bajo las garras del capitalismo abisal.

(Fuente: Boaventura de Sousa Santos. Público)

## HONDURAS

### **CARTA DE LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN APOYO A LA INCORPORACIÓN DEL SUNLA EN EL PROCESO DE INVESTIGACION Y BÚSQUEDA DE LOS GARIFUNAS DESAPARECIDOS DE TRIUNFO DE LA CRUZ**

AL C. JUAN ORLANDO HERNADEZ ALVARADO

Presidente de la República de Honduras

AL C. MAURICIO OLIVA

Presidente del Congreso Nacional de la República de Honduras

AL C. ROLANDO ARGUETA PÉREZ

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras

A LA C. LIDIA ESTELA CARDONA

Procuradora General de la República de Honduras

AL C. OSCAR CHINCHILLA

Fiscal General de la República de Honduras

A LA C. JACKELINE ANCHECTA

Secretaria de Estado por ley en los Despachos de Derechos Humanos.

A LA C. BLANCA IZAGUIRRE

Comisionada Nacional Derechos Humanos Honduras

MICHELLE BACHELET

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

GIOVANNI SASSOLI

Presidente del Parlamento Europeo

NANCY PELOSI

Presidenta Cámara de Representantes EUA

A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

A LA OPINIÓN PÚBLICA

SRAS Y SRES.

En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes como espacio de articulación de organizaciones defensoras de derechos, asociaciones estudiantiles; organizaciones de base, organizaciones barriales, movimientos de mujeres, LGTBIQ, movimientos populares, artistas, campesinos, pueblos indígenas y negros organizados quienes nos fortalecemos en la diversidad, en el consenso y la horizontalidad como práctica política en la búsqueda de verdad y justicia para el pueblo garífuna en Honduras.

El 18 de julio de 2020 alrededor de las 5 de la mañana, un grupo de aproximadamente 30 hombres fuertemente armados con uniformes y chalecos de la Dirección Policial de Investigación (DPI), identificándose como pertenecientes a dichas fuerzas, ingresaron a la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, en el departamento de Atlántida, Honduras. El ingreso a la comunidad se justificó a partir de un supuesto operativo de allanamiento y búsqueda de personas. Según testigos de la comunidad el objetivo del indicado operativo fue capturar al presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz, Alberth Sneider Centeno, quien, junto con Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Trochez Calix, fue detenido luego de ingresar de manera violenta a su vivienda. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Transcurridos 10 meses de la desaparición, las autoridades no han desarrollado una investigación diligente y efectiva que haya permitido establecer el paradero de los desaparecidos, identificar a los responsables de estos hechos o determinar el móvil del delito. Ante ello, y amparados en el principio de autodeterminación de los pueblos, que se contempla, entre otros instrumentos, en la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Asamblea del pueblo Garífuna, a

solicitud de familiares de los jóvenes desaparecidos, aprobó la conformación de El Comité de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA).

Teniendo en cuenta la impunidad que opera en el país(1), y la importancia de ésta en la histórica violación sistemática a los derechos humanos que ha vivido el pueblo garífuna, el SUNLA tiene como objetivo llevar a cabo una veeduría en el proceso de investigación ejecutada por el Estado de Honduras, y de manera simultánea, desarrollar una investigación competente, independiente y autónoma desde las formas ancestrales y propias del pueblo garífuna, que permita un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos, que haga posible identificar la verdad de los hechos y dar respuesta al reclamo de justicia de las familias de los jóvenes desaparecidos y de las comunidades mismas.

Sin embargo, el pasado 26 de marzo de 2021, el Estado de Honduras desatendiendo que estos hechos constituyen una grave violación de derechos humanos que habilitaría la acción pública, negó a través de la Procuraduría General de la República la incorporación del SUNLA en las investigaciones. En su informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas provisionales otorgadas en favor de comunidades garífunas Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra(2), adujo que, la inclusión de SUNLA en el proceso investigativo violaría los principios del derecho internacional público relativos a la soberanía y no intervención en los asuntos internos del Estado

Afirmamos que, de manera contraria a lo señalado por el Estado de Honduras, la incorporación a la investigación de SUNLA y de las personas extranjeras que pudieran integrar no pretende sustituir al Estado en sus atribuciones y obligaciones y tampoco violaría los principios indicados, pues lejos de constituir una forma de injerencia extranjera, supone una iniciativa nacida desde el pueblo garífuna, a través de la cual éste ejerce su autodeterminación como pueblo culturalmente diferenciado. Por el contrario, su integración sería una muestra de voluntad del Estado de respetar los derechos del pueblo garífuna y de trabajar una estrategia conjunta de investigación que permita velar por la transparencia, eficacia e independencia en las investigaciones.

La incorporación del SUNLA en el proceso de investigación no solo se justifica en el respeto a los derechos del pueblo garífuna, sino también a partir de los derechos reconocidos a las víctimas de desaparición forzada(3), y en las posibilidades que otorga el derecho interno de incorporarse como acusación particular(4) en casos de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios públicos. Por tanto, la incorporación de SUNLA es vital como mecanismo para garantizar el legítimo derecho de las víctimas, familiares y representantes de poder acompañar y participar en el proceso de investigación y búsqueda y velar porque este sea exhaustivo e independiente.

De esta manera, les abajo firmantes, organizaciones en defensa de los Derechos Humanos,

**EXIGIMOS:**

1.- La incorporación inmediata del SUNLA al proceso de investigación y búsqueda de los jóvenes garífunas desaparecidos el 18 de Julio del 2020.

2. El respeto irrestricto al derecho de las víctimas, familiares y representantes de acompañar y participar en el proceso de investigación y velar porque este sea exhaustivo e independiente;

2.- El cese a la persecución, criminalización, hostigamiento e intimidación por parte del Estado contra el Pueblo Garífuna;

Por la vida y el territorio, justicia y verdad para el pueblo garífuna.

(Fuente: Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

## **NICARAGUA**

### **A TRES AÑOS DE LA MASACRE DE LA DICTADURA ORTEGA MURILLO**

Mes de Mayo, mes de la madre nicaragüense, estamos aún de luto por la impunidad e injusticia que rodea el crimen de lesa humanidad perpetrado por la dictadura que sufrimos en Nicaragua. Tres años de dolor, por los 19 jóvenes asesinados por escuadrones de militares, policías y paramilitares durante se realizaba la gran MARCHA DE LAS MADRES, el día 30 de Mayo, en honor y memoria de otros tantos jóvenes y adultos ya asesinados por la orden de el VAMOS CON TODO, que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que los mismos escuadrones de la muerte, ejecutaron durante los meses de Abril y Mayo 2018.

### **QUÉ ESTÁ PASANDO AHORA**

Una nueva embestida de la dictadura, ahora en contra de periodistas independientes que su único delito ha sido informar a la ciudadanía sobre lo que ha estado ocurriendo en la realidad cotidiana de estos últimos años. Ahora, el régimen Ortega Murillo en un acto más de venganza política, acusa a los periodistas y dueños de medios de comunicación de lo que el régimen es el culpable: Lavado de dinero, crimen organizado etc. Todo esto sin presentar ninguna prueba.

### **PERVERSIDAD Y MAS VIOLACION A LAS LEYES**

Ahora a tres años de la masacre y en pleno periodo pre electoral, están secuestrando con gran alarde de violencia de la policía y hasta con sicarios vestidos de civil, a ex empleados administrativos de la ya clausurada Fundación Violeta Barrios de Chamorro a fin de obligarlos a firmar “declaraciones “ , bajo chantaje, amenaza y hasta probables torturas ya conocidas, que involucren a la Sra. Cristiana Chamorro Barrios, ex directora ejecutiva de la Fundación, en el delito de “lavado de dinero”. Ella misma, es actualmente pre candidata para el cargo de Presidente de la República con mucha aceptación del electorado.

La Fiscalía General de la República , otra institución bajo el control de Ortega Murillo, pretende con evidente perversidad “construir el caso de acusación” a la Sra.Cristiana Chamorro Barrios, basándose en supuestas declaraciones de sus propios empleados. Estos hasta el momento han negado la acusación.

### **LA DICTADURA IMPIDE EL DERECHO A ELECCIONES LIBRES.**

Con esta nueva embestida la dictadura actúa directamente contra el mismo pueblo nicaragüense, ansioso de votar y participar en las próximas elecciones, a fin de poder sacar del poder a los dictadores, única forma legal y pacífica que queda disponible, después que se han agotado por la represión varias formas de manifestaciones callejeras cívicas con la participación de más de dos millones de ciudadanos demandando la renuncia del dictador. Todo esto luego de una serie de sesiones de diálogo político entre el Presidente Daniel Ortega y una alianza integrada por diversos sectores de la sociedad civil y formada al calor de las protestas cívicas de la población, para canalizar la demanda popular que pedía con urgencia la renuncia del Presidente Ortega o el adelanto de elecciones presidenciales justas y supervisadas.

Estas últimas acciones de represión del Régimen Ortega Murillo, a través de las acusaciones por lavado de dinero y crimen organizado a la Sra. Cristiana Chamorro Barrios, pretenden justificar su captura y tenerla bajo prisión durante el proceso

electoral u obligarla al exilio, para impedir que su candidatura salga victoriosa en las elecciones que deberán realizarse el siete de noviembre de este año 2021.

Es por eso que la solidaridad y unidad entre los nicaragüenses opositores desde la ciudadanía, está demandando con urgencia la unidad entre las organizaciones y partidos opositores, que por razones de legalidad electoral, deberían presentar su propuesta electoral en las próximas elecciones, a fin de poder participar en las mismas y manifestar de manera libre su voluntad ciudadana.

## EL DESGASTE Y DESPRESTIGIO DE LA DICTADURA ES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

El dictador Daniel Ortega es un hombre experimentado en manejar el poder desde hace varias décadas y como todo dictador tiene miedo de proporcionar condiciones para elecciones libres y transparentes, porque sabe que las tiene perdidas desde ahora.

En la actualidad el desgaste y desprestigio del gobierno de Ortega es cada vez mayor, debido a las múltiples crisis que afronta en este periodo, tales son :

- . La crisis económica que se refleja en la carestía de la vida, alto nivel de desempleo formal, bajos salarios en el sector público y privado.

- . La crisis sanitaria : El sistema de salud no está atendiendo adecuadamente el problema de la pandemia Covid 19, no hay una información oportuna que oriente a la población sobre las medidas a tomar y más bien se promueven eventos y actividades sociales y culturales, cuya aglomeración pone en riesgo constante a la población. Además, se ocultan datos a los organismos internacionales como la OPS, OMS sobre la realidad de la pandemia en el país.

El mayor reflejo de inmoralidad lo constituyen las acciones represivas del régimen de Ortega, que ha cometido crímenes de lesa humanidad ya verificados y documentados por los diversos organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

Asimismo en la población se refleja la inmoralidad en el alto índice de femicidios y maltrato a la niñez, así como la corrupción en la administración de los recursos del Estado.

Existe un alto grado de inseguridad ciudadana que lejos de ser atendida por las fuerzas policiales, promueve la impunidad y la desmoralización de la población en general.

## LOS MIEDOS DEL DICTADOR

Desde inicios de este año 2021 el dictador Ortega ha diseñado una estrategia de represión encaminada a obstaculizar por todos los medios la unidad de las organizaciones civiles y partidos políticos, a través de presiones, chantajes y compra de conciencia de quienes estén dispuestos a venderse.

El diseño también se basa en un marco jurídico que le permita perseguir y sancionar a todo aquella organización o persona que considere peligrosa para su permanencia en el poder.

Para tal efecto, desde la Asamblea Nacional, obediente a las órdenes de Ortega, se han aprobado una serie de leyes a fin de contar con instrumentos jurídicos que le sirvan para procesar y sacar del juego electoral, tanto a partidos políticos como a personas que se perfilan como candidatos potables para ganar las elecciones.

Por cuanto, ya han sido canceladas las personerías jurídicas de varios partidos políticos, permitiendo sólo las casillas a partidos políticos que le hacen el juego para luego obtener escaños en la Asamblea o Parlamento.

Acorde con la estrategia de la dictadura Ortega Murillo, todo el sistema estatal ha sido diseñado en estos últimos doce años desde su retorno al poder, a fin de que, tanto las estructuras judiciales, electorales, como policiales, grupos de paramilitares, fuerzas armadas del Ejército Nicaragüense y todas las instituciones de gobierno claves para sostener el poder, estén listas para cerrar filas alrededor de las órdenes de la jefatura superior de Ortega y su esposa Rosario Murillo, quien en la práctica es quien administra todo el aparato de gobierno.

Todo el sistema estatal funciona de manera violatoria de la Constitución Política de la República y de la misma Ley Electoral, la cual prohíbe la reelección continua al cargo de Presidente, así mismo, prohíbe el nepotismo o sea, ejercer dicho cargo en conjunto con familiares, que es el caso de la pareja matrimonial formada por Daniel Ortega en el cargo de Presidente y su esposa Rosario Murillo ejerciendo como vice presidenta de la República. Esta pareja presidencial asumió el poder para ejercerlo desde 2016 a 2021 y nuevamente, pretende imponerse una vez más, en este periodo de 2021 -26. La Revolución Popular Sandinista que atrajo la solidaridad de tantas partes del mundo que pensaron plasmar en ella sus sueños y utopías, se terminó en 1990 con la traición de una parte de su dirigencia que no pudo resistir la tentación del poder y del dinero.

Es por eso, que nosotros como comunidad cristiana consciente de que el momento actual es crucial para determinar el cambio social, económico y político que requiere nuestro país, estamos recurriendo a la solidaridad internacional, para dar a conocer la triste realidad que atraviesa nuestro querido país.

Con altas muestras de hermandad cristiana y agradecimiento especial,  
Pinita Gurdían. Nicaragua, 1 de junio de 2021.

(Fuente: Pinita Gurdian)

## PERÚ

### **PEDRO CASTILLO, EL MAESTRO RURAL AL QUE NADIE VIO VENIR EN LAS ELECCIONES DE PERÚ.**

El candidato de izquierda es profesor de educación primaria y lleva 20 años en política. Hasta este abril, nadie pensaba que podía llegar a presidir el país. Prometía ser una final de infarto y lo fue. La segunda vuelta de las elecciones en Perú entre el candidato de izquierda Pedro Castillo y la de derecha Keiko Fujimori ha estado muy reñida, con un margen disputado hasta el último voto. El ascenso de Castillo ha sido una sorpresa.

Profesor de educación primaria desde 1995 y dirigente sindical, Castillo dio la sorpresa en la primera vuelta de las elecciones de abril al situarse en primera posición, cuando las encuestas apenas le daban el 4% de las preferencias. Nadie pensó entonces que este outsider de 51 años oriundo de Tacabamba, en la norteña región de Cajamarca, tenía tantas posibilidades de llegar a la presidencia de Perú, la quinta economía más importante de América Latina.

Castillo puede convertirse en el primer presidente ajeno a las élites limeñas que han dominado la historia del país desde la época de la colonia. El candidato de origen humilde, con rasgos indígenas, llegó a su centro de votación en esa primera vuelta a lomos de un caballo y con un sombrero de paja. Durante la campaña, no ha contado con el apoyo del poder económico ni de los medios de comunicación. Su ascenso ha sido posible gracias al voto del campo andino, que cuestiona el modelo económico neoliberal y el centralismo de Lima.

Ese voto contestatario proviene principalmente de las regiones del sur, las que siempre se han sentido ninguneadas y cuyas necesidades poco tienen que ver con las de la capital peruana. Pese a que Castillo ha logrado convencer a buena parte del electorado rural y del interior, otra parte importante del porcentaje de votantes está vinculado con el antifujimorismo y, por tanto, es un voto crítico vigilante.

Casi 20 años en política

Castillo es el único de nueve hermanos que ha estudiado una carrera universitaria – sus padres eran analfabetos– y cuenta con un máster en Psicología Educativa. Durante su juventud fue integrante de las rondas campesinas, organizaciones comunales de defensa que se crearon en los años 70. Ahora está casado y tiene tres hijos.

Entró en política en 2002 al formar parte del partido de centro izquierda Perú Posible – fundado por el expresidente Alejandro Toledo–, hasta 2017, cuando la formación se disolvió. Fue precisamente en este año cuando se hizo más conocido, pero no por su labor política, sino por dirigir una huelga de profesores para reclamar mejoras salariales que se prolongó durante casi tres meses. En esas manifestaciones, Castillo se alió con el fujimorismo, que intentaba dañar en ese momento al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Las protestas terminaron con la renuncia de la ministra de Educación, Marilú Martens.

El apoyo de las asociaciones de maestros que ya le acompañaron en 2017, y no la estructura partidaria de Perú Libre, ha sido lo que ha permitido a Castillo recorrer los pueblos y contar con ese voto rural que le acerca al triunfo.

En 2020, anunció su candidatura presidencial para representar a Perú Libre, después de que el líder del partido, Vladimir Cerrón, fuera condenado por corrupción e inhabilitado. Este grupo político se describe como un partido de izquierda marxista, "democrático, descentralista, internacionalista, inclusivo, soberano, humanista y antiimperialista", según consta en su programa, aunque muchas voces críticas lo tachan de populista y radical, de ideas arcaicas y contradictorias en temas relacionados con la corrupción.

En Perú, además, se vincula con facilidad a la izquierda con el terrorismo de Sendero Luminoso –sin necesidad de que haya un mínimo sustento–. De hecho, Keiko Fujimori ha centrado su campaña en agitar el fantasma del comunismo, asociado a ese grupo que sembró el terror a finales de los años 80 y principios de los 90 en el país andino.

Conservador en lo social, cambio en lo económico

Tanto Castillo como el partido que representa son conservadores en lo social. Mientras otros países latinoamericanos están avanzando para aprobar el matrimonio igualitario o empiezan a contemplar la despenalización del aborto, es poco probable que estos asuntos se vayan a discutir en una nueva legislatura peruana bajo el liderazgo del líder de Perú Libre. "Todo lo que tenga que ver con derechos sociales se va a ver sumamente afectado en estos próximos años. Tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori son conservadores en este sentido", asegura Paula Távara, politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sin embargo, la socióloga y activista feminista Indira Huilca sostiene que, bajo una presidencia de Castillo, puede haber una agenda reivindicativa respecto a sectores de la población excluidos en el país, como es la población del sur andino. Sobre la mesa, dice, habrá "temas educativos, culturales, de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas".

Huilca hace algunas matizaciones respecto a los derechos de las mujeres. "No es que haya una posición en contra (por parte Castillo), pero sí un desconocimiento y una mirada más conservadora de ellos, y ahí hay una diferencia con el fujimorismo y sus bancadas aliadas, que directamente los niegan y mantienen una postura de amenaza respecto a los avances que ha habido en Perú". En ese sentido, la socióloga considera que el mayor problema para el movimiento feminista y el movimiento de mujeres son "los sectores conservadores y fundamentalistas que se han empoderado desde la

primera vuelta electoral” y que basan su militancia en oponerse a los derechos sexuales y reproductivos o a la población LGTBI.

Como candidato presidencial, el maestro rural ha propuesto un cambio profundo en lo económico, comprometiéndose a dar un mayor papel al Estado en sectores estratégicos como la minería, el petróleo o las comunicaciones. Habló incluso de nacionalizaciones, pero después Castillo moderó ese discurso. “Los economistas que lo acompañan, siendo de izquierda y promoviendo una transformación, están siendo bastante moderados y cuidadosos con aquello con lo que se comprometen a medio y corto plazo. Han dejado claro, por ejemplo, que no van a nacionalizar ninguna de las empresas, sino que en todo caso renegociarán algunos contratos para que mejore la distribución de recursos de las industrias extractivas”, dice Távara.

Su equipo económico también ha ratificado el respeto a la autonomía del Bando Central de Reservas. Asimismo, Castillo ha propuesto crear una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, ya que la vigente, de 1993, fue promulgada por el dictador Alberto Fujimori, padre de la candidata presidencial.

Superar la profunda crisis política

Perú se encuentra inmerso en una profunda crisis política y de gobernabilidad desde 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones a Keiko Fujimori y el Congreso quedó en manos de la oposición fujimorista, lo que creó enfrentamientos entre ambos poderes. Cuando después Kuczynski renunció en medio de acusaciones por corrupción, Martín Vizcarra lo sustituyó en el cargo. La parte más complicada llegaría en noviembre de 2020, cuando el Congreso destituyó a Vizcarra y asumió Manuel Merino como nuevo mandatario, pero este se vio obligado a dimitir días después tras las intensas protestas que se produjeron en el país. Desde entonces quien dirige el país es el presidente interino Francisco Sagasti.

Pero el país andino atraviesa también una crisis económica y sanitaria generada por el coronavirus. Es uno de los países latinoamericanos más afectados por la pandemia y, con 32 millones de habitantes, ya suma más de 185.000 fallecidos a causa de la COVID-19.

Debido a la pandemia, la tasa de pobreza se disparó en 2020 al 30,1% de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. En otras palabras: casi 10 millones de personas viven con menos de 98 dólares al mes.

En la noche del lunes, durante la recta final del escrutinio, Keiko Fujimori denunció sin pruebas un supuesto “fraude sistemático” en los comicios al encontrar, dijo, una “serie de irregularidades”. El candidato de Perú Libre rechazó esas acusaciones y pidió defender el voto en una “vigilia histórica”. Pero el intento de la postulante derechista por cuestionar los resultados puede abrir un nuevo ciclo de confrontación en un país que necesita una transición de poder lo más ordenada, seria y responsable posible.

Para Huilca, la primera tarea del nuevo presidente a cargo del país tiene que ser “generar confianza y tranquilidad respecto al manejo de la economía y continuar con lo que está en marcha respecto al plan de vacunación contra el coronavirus”. “El gobierno entrante deberá aplicar medidas de consenso para tratar de calmar los ánimos y va a necesitar el compromiso de los partidos políticos que conforman el parlamento y de la candidatura que ha perdido las elecciones”, dice por su parte Távara, quien cree que para resolver la crisis política, el nuevo líder del Gobierno “necesitará al resto de actores”.

(Fuente: María García Arenales. El diario.es)

## **PRONUNCIAMIENTO ACERCA DEL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL PROCESO ELECTORAL**

“... denunciar el control de estos Medios de Comunicación Social y la manipulación ideológica que ejercen los poderes políticos y económicos que se empeñan en

mantener el «statu quo» ... Los periodistas no siempre se muestran objetivos y honestos en la transmisión de noticias, de manera que son ellos mismos los que a veces manipulan la información, callando, alterando o inventando el contenido de la misma, con gran desorientación para la opinión pública. El monopolio de la información, tanto de parte de los gobiernos como de parte de los intereses privados, permite el uso arbitrario de los medios de información y da lugar a la manipulación de mensajes de acuerdo con los intereses sectoriales...". (III Conferencia Episcopal Latinoamericana, Puebla, 1979, n. 1069)

Los Equipos Docentes del Perú, en la actual coyuntura política de nuestra patria, nos dirigimos a las autoridades y ciudadanía en general para:

Manifiestar nuestra indignación ante el comportamiento poco ético de la mayoría de los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, que han demostrado evidente preferencia por una candidatura, dándole amplia cobertura, desinformando e infundiendo miedo en la población respecto a la otra candidatura, lo que contradice los principios de un periodismo honesto e imparcial.

La última encuesta publicada por Instituto de Estudios Peruanos-IEP (Informe de opinión mayo II 2021), señala que el 59% de la población percibe que los medios de comunicación están favoreciendo una candidatura; de esta el 79% percibe que favorecen a la candidata Keiko Fujimori.

Como laicas y laicos católicos, en ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, interpelamos y denunciemos esta conducta teniendo en cuenta las enseñanzas de la Iglesia Católica.

Como educadoras y educadores, rechazamos la manipulación ideológica de los medios de comunicación que genera miedo y angustia en la población peruana. Hacemos un llamado a la ciudadanía para mantener la serenidad y tener una actitud crítica frente a mensajes que desinforman y causan daño psicológico agravando los efectos de la pandemia.

Esperamos que los medios de comunicación desempeñen con ética el rol importante que les toca en este proceso electoral, para así contribuir a fortalecer la democracia en el país que significa escuchar la voz del pueblo, principalmente de quienes han sido y son postergados históricamente.

Mantengamos la esperanza de la cual nos habla el Papa Francisco en su carta Encíclica Fratelli Tutti en el capítulo 1: "La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna".

## EQUIPOS DOCENTES DEL PERU

(Fuente: Enviado a la redacción por carlosalejos Add contact)